AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO RICO -Y- BROTHERHOOD OF RAILWAY AND AIRLINE CLERKS
 Caso Núm. P-2742; AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO RICO -Y- BROTHERHOOD OF RAILWAY AND AIRLINES CLERKS; Caso Núm. PP-107
 Decisión Núm. D-644; Resuelto en 2 de mayo de 1973

DECISION Y ORDEN

El 15 de febrero de 1972, el Jefe Examinador de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, en adelante llamada la Junta, expidió su Informe y Recomendaciones Sobre las Solicitudes de Clarificación de la Unidad Apropiaada en los casos del epígrafe, a tenor con la Resolución de la Junta del 29 de abril de 1971.

El 10 de marzo de 1972, la Brotherhood of Railway and Airline Clerks, en adelante denominada la Brotherhood, sometió un escrito en el que dejó saber que está conforme con las conclusiones y determinaciones del Jefe Examinador vertidas en el referido informe.

El 12 de abril de 1972, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, en adelante denominada la Autoridad, radicó excepciones al Apartado B del mencionado informe y sometió exhibits en apoyo de su posición.

Hemos estudiado el Informe y Recomendaciones del Jefe Examinador, así como el expediente completo del caso, y por la presente, confirmamos las determinaciones contenidas en dicho Informe y adoptamos sus recomendaciones con las modificaciones que indicamos a continuación:

1. El status de las personas afectadas por el Estudio de Puestos de la firma C.W. Robinson, Co., Inc.

La Autoridad sostiene que se debe revocar las determinaciones del Jefe Examinador en su informe en cuanto a Jesús López Rivera, Luis A. García Ramírez, José del C. Martínez Delgado, Alberto Vergeli Maldonado, Carlos E. Santiago Vicil, Alejandrina Andino Santos, (Funcionarios Ejecutivos I), Jesús Castillo Sánchez, Francisco Rodríguez Santiago y Vicente de Armas Delgado, (Funcionarios Ejecutivos II). Basa su contención en que el Estudio de Puestos efectuado por la firma C.W. Robinson, Co., Inc. implementado, luego de que el Jefe Examinador rindió su informe a las partes, clasificó las plazas de dichas personas en una categoría que conforme a nuestras normas pertenecen a la unidad apropiada de la Unión de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (Independiente-Auténtica), en adelante denominada la Unión Independiente.

Como al hacer su informe el Jefe Examinador no tuvo ante sí tal estudio de puestos, la Junta ordenó una investigación sobre el mismo para determinar sus efectos, si algunos, sobre la unidad apropiada de los empleados profesionales y así hacer una determinación sobre la contención de la Autoridad.

La investigación revela que la Autoridad negoció con la Brotherhood y la Unión Independiente en los respectivos convenios colectivos de éstas, 1/ que "la Autoridad

1/ El convenio colectivo con la Unión Independiente se firmó el 12 de junio de 1970 con vigencia desde el 1ro. de enero de 1970 hasta el 31 de diciembre de 1971. El convenio con la Brotherhood se firmó el 15 de julio de 1970 con vigencia desde el 1ro. de enero de 1970 hasta el 31 de diciembre de 1971.

contratará una firma de competencia reconocida en el campo de la evaluación y administración de personal para que haga un estudio de los puestos de la Autoridad y su clasificación empezando no más tarde de 60 días laborables a partir de la fecha de firma de los convenios." Las partes negociaron, además, que "si como resultado del estudio algún puesto fuera clasificado a un nivel inferior, el empleado que lo ocupe continuará desempeñándolo hasta que la Autoridad pueda pasarlo a uno de la clasificación que le corresponde, y si algún puesto fuera clasificado a un nivel superior, cualquier cambio en retribución, si alguno, será efectivo a partir de julio 1ro. de 1971 o el día primero del mes siguiente al de la determinación del estudio si ésta fuera posterior a julio 1ro. del 1971." Finalmente, las partes negociaron en sus convenios que "conviene y aceptan que los resultados del estudio de puestos serán finales y obligatorios."

El 29 de septiembre de 1972, la Brotherhood y la Autoridad ratificaron lo negociado en el convenio colectivo mediante una Estipulación.

Habiendo acordado las partes la realización del estudio de puestos, alrededor de septiembre de 1970, la Autoridad contrató con la firma C.W. Robinson Co., Inc., para que llevara a cabo el mismo. Dicha firma debería hacer un estudio de las clasificaciones de los empleados unionados y los oficiales de la Autoridad y recomendar aquellas mejoras necesarias para modernizar y mejorar completamente el Programa de Clasificación de ésta.

El 1ro. de octubre de 1972, la Autoridad y las uniones concernidas implementaron el Estudio de Puestos efectuado por la aludida firma.

Las personas en cuestión que ocupaban indistintamente las plazas de Funcionario Ejecutivo fueron clasificados como Oficinista General III y Oficinista de Estadísticas, resultando esto una controversia ante nos.

La Junta desea hacer constar que tiene facultad exclusiva por ley para determinar la unidad apropiada para la negociación colectiva y que ningún estudio ni organización administrativa o contractual puede obligar en forma alguna su autoridad de ley.

Esta facultad de implementar la política pública es indelegable y compete únicamente a esta Junta, conforme a la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.

Hecha esta salvedad, la Junta puede ejercer su discreción para aprovecharse de cualquier estudio o sus resultados que le ayude a lograr una visión más clara y completa en la determinación de la unidad apropiada. Todo análisis o estudio relacionado con la clasificación de plazas en la unidad apropiada deben ser sometido a la Junta para que ésta tenga mayor y mejor elemento de juicio.

Concluimos que aquellas plazas que alegadamente fueron reglasificadas de acuerdo con el Plan Robinson que conllevan menos requisitos o condiciones de trabajo, deberán ser cabalmente analizadas a base de nuestras normas. Mientras dichas plazas estén ocupadas por las personas que fueron contratadas bajo las condiciones originales y que estén en espera de una reubicación, esas plazas deberán estar incluidas en la unidad de profesionales. Tan pronto estas plazas sean clasificadas con sus nuevas condiciones estipuladas, deberán pertenecer las personas que las ocuparen a la Unión Independiente.

Por lo fundamentos que señalamos anteriormente prece- demos a hacer las determinaciones sobre el estatus de las personas antes mencionadas que ocupan las plazas de Funcio- narios Ejecutivos I ó II.

- a) Es status de Jesús López Rivera, Luis A. García José del C. Martínez Delgado, Alberto Vergeli Maldonado, y Carlos E. Santiago Vicil

Estas personas ocupaban el puesto de Funcionario Ejecutivo I. De acuerdo al Estudio de Puestos, estas cla- sificación fue eliminada y en su lugar se creó la plaza inferior de Oficinista General III. Esta clasificación, aunque se le dejan los mismos deberes de tipo de oficina la Autoridad le exige al candidato cuarto año de escuela superior como requisito de preparación académica para ocu- parla. Tal requisito y los deberes que conlleva la plaza hace que esté comprendida en la unidad apropiada de la Unión Independiente y no en la unidad de empleados profe- sionales.

La Autoridad reubicó a todas estas personas en los puestos de Gerente Comercial Auxiliar I con funciones de supervisión a partir del 1ro. de abril de 1973.

Por lo anterior, concluimos que estas personas son supervisores, por lo que deben estar excluidos de cualquier unidad apropiada de negociación colectiva. Concluimos, además, que cualquier otra persona que ocupe la plaza de Oficinista General III debe estar comprendida en la unidad apropiada de la Unión Independiente.

- b) El status de Alejandrina Andino Santos

Alejandrina Andino Santos al momento de la investiga- ción se desempeñaba como Funcionaria Ejecutiva I en la Sección Administrativa del Area de Operaciones de la Autoridad.

De acuerdo al referido estudio, el puesto de Andino Santos fue clasificado como Oficinista de Estadísticas a base de los deberes que ella desempeña. Dicha plaza por sus deberes y por la preparación académica mínima de cuarto año de escuela superior que exigen para ocuparla, le da el status de no profesional.

Alejandrina Andino Santos continúa actualmente como Funcionaria Ejecutiva I, ya que está en espera de que la Autoridad la relocalice en otro puesto o a un puesto igual o similar. Siendo ésta su situación, concluimos que Andino Santos es una empleada profesional mientras esté en espera de su reubicación y debe estar incluida por ahora en la unidad de empleados profesionales. Cualquier persona que sea seleccionada para ocupar la plaza de Oficinista de Esta- dísticas debe estar comprendida en la unidad de la Unión Independiente.

- c) Es status de Jesús Castillo Sánchez, Francisco Rodríguez Santiago y Vicente de Armas Delgado.

Estas tres personas ocupaban el puesto de Funcionario Ejecutivo II, el primero en el Area de Planificación y los otros dos en el Departamento de Diseño de la Autoridad. En el estudio de Puestos Robinson estos empleados fueron clasificados como Oficinistas General III y como dijimos anteriormente, cualquier persona que ocupe esta plaza debe estar incluido en la unidad apropiada de la Unión Independiente.

Ante este resultado del referido estudio, la Autoridad procedió a relocalizar a estos empleados. Jesús Castillo Sánchez pasó a ocupar el puesto de Ayudante Administrativo del Jefe de la Oficina de Seguridad Industrial el 1 de marzo de 1973. Dicho puesto conlleva funciones de supervisión. Francisco Rodríguez Santiago pasó el 1 de mayo de 1973 a Analista de Asuntos Disciplinarios a cargo de la disciplina de los empleados. Vicente de Armas Delgado fue ascendido a Técnico de Servicios a Consumidores II el cual está comprendido en la unidad apropiada de empleados profesionales.

Por lo antes expuesto, determinamos que Jesús Castillo Sánchez y Francisco Rodríguez Santiago deben estar excluidos de la unidad apropiada de los empleados profesionales y de cualquier otra unidad por ser el primero un supervisor y el otro un empleado confidencial.

Determinamos, además, que Vicente de Armas Delgado es un empleado profesional y debe continuar incluido en la unidad de empleados profesionales. Finalmente, como ya nos expresamos anteriormente, determinamos que cualquier persona que ocupe el puesto de Oficinista General III debe incluirse en la unidad apropiada de la Unión Independiente.

2. El status de Carmen Martínez de Del Toro

Carmen Martínez de Del Toro ocupa el puesto de Funcionaria Ejecutiva I en la División de Compras del Departamento de Suministro de la Autoridad. Está a cargo de la dirección y supervisión de la Sección Administrativa. Su labor consiste en dirigir y supervisar las tareas de 13 empleados. A éstos les trasmite órdenes y les asigna trabajo.

En el desempeño de su labor Carmen Martínez de Del Toro recomienda la permanencia a los empleados en períodos probatorio; vela por la disciplina del grupo; autoriza las vacaciones y las licencias por enfermedad y efectúa entrevistas del personal a ser seleccionado para la Sección Administrativa.

A base de lo anterior, concluimos que Martínez de Del Toro es una supervisora y, por lo tanto no tiene derecho a pertenecer a la unidad apropiada de los empleados profesionales ni a ninguna otra con derecho a la negociación colectiva.

3. El status de Luis R. Piña Nazario

La Autoridad alega que Luis R. Piña Nazario es un supervisor y sometió como evidencia ciertos documentos en los que Piña Nazario aparece realizando acciones de personal. Dicha evidencia no estuvo ante el Jefe Examinador al redactar su informe.

La investigación revela que además de las funciones que señala el Jefe Examinador en su informe, Piña Nazario supervisa la labor de cuatro empleados a quienes les asigna y supervisa el trabajo.

En el desempeño de su labor, Luis R. Piña Nazario, entrevista y recomienda personal para ocupar puestos en la Autoridad; recomienda personal para ocupar puestos en la Autoridad; recomienda la licencia por vacaciones y las licencias por enfermedad a los empleados que están bajo su dirección; le imparte el visto bueno al récord de asistencia de dichos empleados bajo su supervisión y comprueba las solicitudes de reembolso de gastos de viajes y dietas de caja menuda de éstos.

Por lo anterior, concluimos que Pifia Nazario es un supervisor y como tal lo excluimos de la unidad apropiada de los empleados profesionales, y de cualquier otra unidad apropiada de negociación colectiva.

4. El status de Jaime Rodríguez Marcano

La Autoridad alega que Jaime Rodríguez Marcano no es un empleado profesional. Apoya su contención en el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, D-520.

En la citada Decisión y Orden adoptamos la definición de profesional expuesta en el caso de la Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, D-465. En consecuencia, decimos que eran empleados profesionales aquellos a quienes el patrono exigía por lo menos dos años de colegio y cumplían con este requisito. En los casos en que los incumbentes carecían del requisito de la preparación académica en sustitución a dicho requisito se les acreditaba la experiencia acumulada en el desempeño de la plaza.

En la Decisión y Orden Núm. 520, supra, determinamos que las tareas que realizan los ayudantes de Ingenieros son de carácter semi-técnico y sencillas, lo que unido a la preparación académica mínima de cuarto año que le exige la Autoridad no les da el status de profesionales, según el criterio arriba expresado.

La investigación revela que Jaime Rodríguez Marcano ocupa el puesto de Ayudante de Ingeniero. La Autoridad le requiere cuarto año de escuela superior para ocupar dicho puesto.

Por lo anterior, concluimos que Jaime Rodríguez Marcano no es un profesional y debe estar excluido de la unidad de los empleados profesionales de la Autoridad.

R E S O L U C I O N

El 18 de diciembre de 1968, la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico emitió una Decisión y Orden de Elecciones en el caso P-2551. En ella ordenó la celebración de una elección por votación secreta entre todos los empleados profesionales que emplea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.

La elección se llevó a cabo el 14 de febrero de 1969. Tenía derecho a participar en la elección todo el personal profesional que trabajó para la Autoridad durante el período comprendido entre el 1 y el 15 de enero de 1969.

La unidad que se encontró apropiada y en la cual se celebró la elección es la siguiente:

"Todos los empleados profesionales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico; excluidos: ejecutivos, supervisores, empleados confidenciales, empleados íntimamente ligados a la Gerencia (closely allied to management), empleados probatorios (excepto cuando siendo empleados regulares estén en período probatorio debido a ascenso), empleados cuyos servicios prestados por tiempo determinado o determinable y no indefinidamente, empleados profesionales cuyas plazas o puestos presentan conflictos potenciales de intereses con los otros comprendidos en las distintas unidades

apropiadas de negociación colectiva establecidas en la Autoridad, empleados incluidos en este momento en cualesquiera de las demás unidades de negociación colectiva establecidas en la Autoridad y toda otra persona con autoridad para emplear, despedir, ascender, disciplinar o de otra manera variar el status de los empleados o hacer recomendaciones al efecto."

El 22 de julio de 1970, la unión certificada, Hermandad de Empleados Profesionales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, afiliada a la BRAC, AFL-CIO, radicó el caso núm. P-2742 mediante el que solicitó que se clarifique la unidad que se encontró apropiada en el caso P-2551, D-510. En resumen, la Hermandad solicita que se incluyan en la unidad apropiada a diecinueve (19) personas comprendidas en las siguientes clasificaciones de empleo: Ingeniero II, III y IV, Contador I, Bachillerato Ingeniería, Gerente Auxiliar Servicio a Consumidores II, Funcionario Ejecutivo I, Técnico Administración II y III, Trabajadora Social y Agrimensor I.

El 26 de agosto de 1970, el patrono, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico también solicitó la clarificación de la mencionada unidad apropiada mediante la radicación del caso núm. PP-107. El patrono solicita que se excluyan de la unidad apropiada veintiocho (28) personas comprendidas en las siguientes clasificaciones de empleo: Asistente Supervisión Servicio a Consumidor I, II y III, Funcionario Ejecutivo I, II, Técnico Administración I, II y III, Contador II e Ingeniero III.

A tenor con las solicitudes de las partes la División de Examinadores de la Junta condujo una investigación informal de ambos casos. Sin embargo, luego de concluida la investigación no se ha podido llegar a acuerdo alguno con las partes.

En vista de lo anterior, la Junta considera que lo más conveniente y práctico es que ambos casos sean consolidados y referidos a la División de Examinadores para que ésta practique una investigación de todas y cada una de las clasificaciones de empleos que se mencionan en las peticiones de las partes. Luego de concluida la investigación el Jefe Examinador de la Junta hará un informe a las partes en el que expondrá los hallazgos de la investigación y sus conclusiones y recomendaciones. Dentro de los diez (10) días laborables de la fecha de recibo del informe cualesquiera de las partes podrá levantar excepciones al mismo. Transcurridos los diez (10) días, los expedientes completos de ambos casos, incluido el informe del Jefe Examinador y las excepciones, si las hubiesen, pasarán a la consideración de la Junta para su decisión final.

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 1971.

ADOLFO D. COLLAZO
Miembro Asociado

REECE B. BOTHWELL
Miembro Asociado

Presidente de la Junta, Lic. Lino Padrón, no participó en la consideración de esta Resolución.

INFORME Y RECOMENDACIONES DEL JEFE EXAMINADOR
SOBRE LAS SOLICITUDES DE CLARIFICACIÓN DE LA UNIDAD
APROPIADA EN LOS CASOS DE EPIGRAFE

INTRODUCCIÓN:

De conformidad con la Resolución que expidió la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico el 29 de abril de 1971, el Jefe Examinador que suscribe expide el presente Informe en los casos de epígrafe.

El 18 de diciembre de 1968, la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico emitió la Decisión y Orden de Elecciones Núm. D-510 en el caso P-2551. En ella ordenó la celebración de una elección por votación secreta entre los empleados profesionales que emplea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.

La elección se llevó a cabo el 14 de febrero de 1969, bajo la dirección y supervisión del Jefe Examinador de la Junta. Tenía derecho a participar en la elección todo el personal profesional que trabajó para la Autoridad durante el período comprendido entre el 1ro. y el 15 de enero de 1969.

La unidad que se encontró apropiada y en la cual se celebró la elección es la siguiente:

"Todos los empleados profesionales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, excluidos: ejecutivos, supervisores, empleados confidenciales, empleados íntimamente ligados a la gerencia (closely allied to management), empleados probatorios (excepto cuando siendo empleados regulares estén en período probatorio debido a ascenso), empleados cuyos servicios son prestados por tiempo determinado o determinable y no indefinidamente, empleados profesionales cuyas plazas o puestos presentan conflictos potenciales de intereses con los otros comprendidos en las distintas unidades apropiadas de negociación colectiva establecidas en la Autoridad, empleados incluidos en este momento en cualesquiera de las demás unidades de negociación colectiva establecidas en la Autoridad y toda otra persona con autoridad para emplear, despedir, ascender, disciplinar, o de otra manera variar el status de los empleados o hacer recomendaciones al efecto."

El 22 de junio de 1970, la Hermandad de Empleados Profesionales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, afiliada a la BRAC, AFL-CIO, radicó el caso Núm. P-2742 mediante el cual solicitó que se clarifique la unidad que se encontró apropiada en el caso Núm. P-2551, D-510. Solicita específicamente que se incluyan en la unidad apropiada a 19 personas comprendidas en las siguientes clasificaciones de empleo: Ingeniero II, III y IV, Contador I, Bachillerato Ingeniería, Gerente Auxiliar Servicio a Consumidores II, Funcionario Ejecutivo I, Técnico de Administración II y III, Trabajador Social y Agrimensor I.

El 26 de agosto de 1970, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico radicó el caso Núm. PP-107 mediante el cual también solicitó la clarificación de la unidad apropiada. Solicitó, específicamente, que se excluyan de la unidad apropiada a 28 personas comprendidas en las siguientes clasificaciones de empleo: Asistente Supervisión Servicio a Consumidores I, II y III, Funcionario Ejecutivo I y II, Técnico de Administración I, II y III, Contador II e Ingeniero III.

En su Resolución del 29 de abril de 1972, la Junta consideró que lo más conveniente y práctico era consolidar ambos casos y referirlos a la División de Examinadores para que ésta practicara una investigación de todas y cada una de las clasificaciones de empleo que se mencionan en las peticiones de la partes. Dispuso que luego de concluida la investigación, el Jefe Examinador de la Junta haga un informe a las partes en el que exponga los hallazgos de la investigación y sus conclusiones y recomendaciones. Dentro de los 10 días laborables de la fecha de recibo del informe cualquiera de las partes podrá levantar excepciones al mismo. Una vez que hayan transcurrido los diez (10) días, los expedientes completos de ambos casos, incluido el informe del Jefe Examinador y las excepciones de las partes, si las hubiesen, pasarán a la consideración de la Junta para su decisión final.

El 12 de mayo de 1971 el abogado de la Brotherhood, Lic. Nicolás Delgado Figueroa radicó una Moción de Reconsideración en la Junta en la que sostiene que los casos del epígrafe son diferentes y no pueden ser consolidados.

El 13 de agosto de 1971 la Junta emitió una nueva Resolución en la que resolvió declarar sin lugar la Moción de Reconsideración de la Brotherhood.

A tenor con la Resolución de la Junta del 29 de abril de 1971, y luego de obtener los nombres de los empleados que la Autoridad y la Brotherhood solicitaron fuesen investigados, la División de Examinadores realizó una investigación de las clasificaciones de empleo que las partes interesan que sean clarificadas. La Brotherhood sometió una lista de 19 nombres y la Autoridad una de 28 para un total de 47.

Durante la investigación entrevistamos a los empleados objeto de la controversia y obtuvimos de ellos información sobre las funciones que realizan y sus relaciones de trabajo con la Autoridad. Le solicitamos a ambas partes que nos sometiesen toda la información que tuviesen para apoyar sus respectivas contenciones. La Autoridad sometió abundante información de cada empleado comprendido en los casos y, además, un informe narrativo de su posición sobre cada uno. La unión, por el contrario, no sometió información alguna a pesar de nuestros requerimientos.

Organización del Informe:

A fin de presentar en el presente Informe los hallazgos encontrados a través de nuestra investigación, así como nuestras conclusiones y recomendaciones, agruparemos los nombres de los empleados concernidos por clasificaciones de empleo, sin importar el que lo sometiera la Brotherhood o la Autoridad. De esta manera, cabe la posibilidad de que en algún Apartado del Informe consideremos, al mismo tiempo, a personas sometidas a nuestra consideración por ambas partes. Además, los agruparemos de acuerdo a la conclusión que hagamos de cada uno en término del "status" que tengan en la Empresa tales como empleado profesional, supervisor, empleado íntimamente ligado a la gerencia, empleado que presenta conflictos potenciales de intereses con los de otros en la empresa, etc.

Apartado A

Personas cuyo status en la Autoridad es de Supervisor

La investigación revela que de las 47 personas que sometieron la Brotherhood y la Autoridad para que se

investigasen y se hiciese una determinación de su status, 11 corresponden a supervisores. Para mayor conveniencia, agruparemos a estas personas por clasificaciones de empleo o similitud de tareas.

1. El status de Raúl Andreu Flores

Raúl Andreu Flores ocupa el puesto de Ingeniero Supervisor en el Departamento de Construcción de la Autoridad. Actualmente está destacado en la zona de Bayamón. Tiene a su cargo la supervisión de los proyectos de construcción por administración y por contrato en esa zona que comprende alrededor de 13 municipios. Realiza en gran medida la parte técnica de esos proyectos. En el desempeño de sus funciones tiene bajo su dirección y supervisión inmediata a un grupo de supervisores y empleados tanto de oficina como de los propios proyectos. Entre estos se pueden mencionar ingenieros, auxiliares administrativos, auxiliares de ingenieros, maestros de obra, obreros, etc. En el desempeño de sus funciones puede reclutar y nombrar personal de campo y, asimismo, puede dejarlo cesante a la terminación del proyecto que se construya o por alguna otra causa. En adición, la investigación revela que tiene facultad para hacer recomendaciones efectivas que afecten favorable o adversamente el status de los empleados bajo su dirección.

A base de lo anterior, concluimos que el Ingeniero Raúl Andreu Flores es un supervisor y, por lo tanto, recomendamos a la Junta que lo excluya de la unidad apropiada de negociación colectiva.

2. El status de Arquelio Montalvo Rodríguez

Esta persona ocupa el puesto de Ingeniero IV en el Departamento de Servicios Técnicos de Ingeniería de la Autoridad. Es el responsable del equipo que se utiliza en la construcción de bombas de acueductos y alcantarillados en las urbanizaciones privadas y en los proyectos gubernamentales como los de CRUV, Fomento Industrial, etc. Realiza los estudios para la aprobación de los equipos a instalarse en las estaciones de bombas, plantas de tratamiento y bombas de acueducto y alcantarillado sanitario. Se encarga de coordinar con el personal de la unidad las inspecciones que se realizan en las urbanizaciones y proyectos gubernamentales. También entiende consultas y asesora a los urbanizadores con relación a los equipos a usarse.

Es el responsable de la supervisión del personal adscrito a la Unidad de Equipos y Bombas que consiste de una secretaria, tres ingenieros y un supervisor de construcción. Le asigna las tareas a este personal y vela porque el mismo se realice conforme a las instrucciones. Con relación al mismo puede hacer recomendaciones que favorable o adversamente afecten el status que mantienen en la Autoridad. Por lo general estas recomendaciones las hace verbales pero el Ingeniero Montalvo asegura que en ocasiones las ha hecho por escrito. También evalúa a los empleados de la unidad cuando es necesario.

A base de lo anterior, concluimos que el Ingeniero Arquelio Montalvo es un supervisor y, por lo tanto, recomendamos a la Junta que lo excluya de la unidad apropiada de negociación colectiva.

3. El status de José E. Solís Gonzales

José E. Solís González es un Ingeniero IV en el Departamento de Servicios Técnicos de Ingeniería de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Está a cargo de la unidad

de Proyectos Privados de ese Departamento. Es el responsable de supervisar el trabajo de los ingenieros que trabajan en la Unidad los cuales se dedican a examinar, cotejar y aprobar los planos que someten los urbanizadores privados para asegurarse de que los mismos cumplen con las normas y los requisitos de la Autoridad. En adición, tiene que personalmente cotejar los planos que contiene alguna complejidad técnica.

El Ingeniero Solís González tiene bajo su dirección y supervisión a siete empleados. Con relación a éstos puede hacer recomendaciones las cuales, en forma adversa o favorable pueden afectar el status que tienen en la Autoridad. En ocasiones ha sustituido al Jefe de la Sección en cuyos casos ha asumido todas las responsabilidades de este. No obstante, como ya señalamos, siempre es responsable del trabajo y del personal adscrito a la unidad de Proyectos Privados.

A base de lo anterior, concluimos que el Ingeniero José E. Solís González es un supervisor por lo que le recomendamos a la Junta que lo excluya de toda unidad apropiada de negociación colectiva.

4. El status de Carlos M. Tapía Velázquez

Carlos M. Tapía Velázquez es un Ingeniero IV en el Departamento de Servicios Técnicos de Ingeniería de la Autoridad. Está a cargo de la Unidad de Proyectos Públicos que consta de unos siete ingenieros, además, de algún personal temporero que por lo general son auxiliares y ayudantes de ingeniería. Los ingenieros y demás personal que trabajan en esta unidad se dedican a revisar los planos de los proyectos públicos para asegurarse que están de acuerdo con las normas establecidas por la Autoridad en lo que respecta a sistemas de acueductos y de alcantarillados. Esto comprende a caseríos públicos, centros gubernamentales, proyectos de la Compañía de Fomento Industrial, etc.

Luego de hacerse la revisión de los planos, el Ingeniero Tapía Velázquez los inicia y los envía a la Oficina del Jefe del Departamento quien le imparte la aprobación final.

El Ingeniero Tapía Velázquez es también el encargado del personal de la unidad y, como tal, se encarga de la disciplina del grupo, de coordinar las actividades de trabajo de éstos y de hacer las recomendaciones que sean pertinentes. Estas recomendaciones pueden afectar favorable o adversamente el status de estas personas en la empresa.

A base de lo anterior, concluimos que el Ingeniero Carlos M. Tapía Velázquez es un supervisor y, por lo tanto, recomendamos a la Junta que lo excluya de toda unidad apropiada de negociación colectiva.

5. El status de Luis E. López Salgado

Luis E. López Salgado es un Ingeniero IV en el Departamento de Servicios Técnicos de Ingeniería de la Autoridad. Ocupa actualmente, la posición de Jefe de la Unidad de Inspección de Urbanizaciones. Tiene que coordinar y supervisar la labor que realizan nueve Ingenieros III, tres Ingenieros no licenciados, un Supervisor de Proyectos II, dos Supervisores de Proyectos I, una Oficinista Taquígrafa I, una Oficinista taquígrafa II, una Oficinista dactilógrafa I y una Oficinista I. A este personal tiene que asignarle las tareas y luego velar porque las realicen conforme a las instrucciones.

En adición a lo anterior, el Ingeniero López Salgado tiene la responsabilidad de rendir un informe mensual al Jefe de la Sección y preparar las cartas de aprobación de sistemas de acueductos y alcantarillados para los urbanizadores.

Con relación al personal de la unidad es el Ingeniero López Salgado quien controla la asistencia, hace recomendaciones sobre el periodo probatorio de los empleados que están en esa etapa, autoriza y controla los viajes al campo de éstos, recomienda ascensos, acciones disciplinarias si fuesen necesarias, etc. Como vemos, este funcionario toma determinaciones que, ya favorable o adversamente, pueden afectar el status de los empleados que dirige y supervisa.

A base de lo anterior, concluimos que el Ingeniero Luis E. López Salgado es un supervisor y, por lo tanto, recomendamos a la Junta que lo excluya de toda unidad apropiada de negociación colectiva.

6. El status de José Francisco Vales Matos

José Francisco Vales Matos ocupa el puesto de Asistente de Supervisión III en la División de Servicios a Consumidores del Departamento de Operaciones de la Autoridad desde abril de 1971. Antes era asistente de Supervisión II en la misma División y pertenecía a la Hermandad de Empleados Profesionales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados afiliada a la BRAC. Cuando ocupaba esta última posición se dedicaba a visitar las Agencias Comerciales de la Autoridad para ver que funcionaran de acuerdo a los procedimientos establecidos. No tenía, entonces, personal alguno bajo su dirección y supervisión.

En la plaza de Asistente de Supervisor III que ocupa actualmente sirve, generalmente, como Supervisor de Relevo. En este orden se dedica a sustituir a los gerentes locales del Area Metropolitana que se ausentan por vacaciones ordinarias, de enfermedad, renuncia, traslado o por alguna otra causa. En esta área hay ocho oficinas locales por lo que el Sr. Vales Matos está continuamente sustituyendo alguno de estos gerentes locales. Como gerentes de una de estas oficinas tiene bajo su dirección y supervisión inmediata a todo el personal de la oficina que fluctúa entre treinta y cincuenta empleados. Como tal, se encarga de coordinar y velar porque se realicen todas las actividades de la Oficina y de acuerdo con las normas establecidas. En el desempeño de estas funciones tiene a otros supervisores que le ayudan tanto en el desarrollo del trabajo como en el mantenimiento de la disciplina. Mientras sustituye a los gerentes locales tiene poderes para nombrar y cesantar personal temporero así como para recomendar acciones que puedan alterar favorable o adversamente el status de los empleados regulares.

Por lo anterior, concluimos que el Sr. José Francisco Vales Matos es un supervisor, por lo que le recomendamos a la Junta que lo excluya de toda unidad apropiada de negociación colectiva.

7. El status de Angel M. Ríos Soto

Angel M. Ríos Soto ocupa el puesto de Contador III desde octubre de 1970. Es el Sub-Jefe de la Sección de Activo Fijo de la División de Activo Fijo e Informes de la Autoridad. Hasta la fecha de su nombramiento como Contador III, ocupaba la plaza de Contador II y formaba parte de la Hermandad de Empleados Profesionales a la cual le pagaba cuotas y hasta incluso fue miembro del Comité de Negociación.

Como Sub-Jefe de la Sección de Activo Fijo, Ríos Soto ayuda de día a día, al Jefe de la Sección, Sr. Angel L. Cartagena en la coordinación de las actividades de la oficina y en la supervisión del personal de la misma. En este orden, tiene a su cargo algunos empleados de la sección a quienes les distribuye el trabajo y vela porque lo realicen conforme a las normas establecidas.

En sus actuales funciones el Sr. Ríos Soto puede hacer recomendaciones efectivas que en forma adversa o favorable pueden afectar el status de los empleados de la sección en la que trabaja.

En adición a lo anterior, Ríos Soto tiene la responsabilidad de revisar y distribuir la correspondencia que llega a la Sección, redactar cartas y memorandos, participar directamente en la preparación de los informes anuales y hacer recomendaciones respecto a los fondos que maneja la Autoridad.

Concluimos, pues, que Angel M. Ríos Soto es un supervisor y, como tal, debe estar excluido de toda unidad apropiada de negociación colectiva.

8. El status de Carlos M. Rodríguez Carrero

Carlos M. Rodríguez Carrero ocupa el puesto de Contador II en la Sección Fiscal del Departamento de Finanzas de la Autoridad. Es quien tiene el control de pago de dietas y millaje y es el responsable de verificar que éstos se hagan de acuerdo a los convenios y a las normas administrativas que se establezcan. También tiene a su cargo los reembolsos de la caja menuda y autoriza con su firma los pagos a contratistas, los reembolsos de caja menuda y los pagos misceláneos. Prepara cartas y memorandos para la firma del jefe inmediato y en algunas ocasiones para su propio firma.

Para llevar a cabo la anterior labor, el Sr. Rodríguez Carrero tiene bajo su dirección y supervisión inmediata un grupo de diez empleados, la mayor parte de los cuales son Auxiliares Fiscales. A éstos, les asigna tareas aun cuando ya éstas están prácticamente prescritas. Sobre este personal tiene el señor Rodríguez Carrero poderes para hacer recomendaciones que puedan afectar de una u otra manera el status que mantienen en la Autoridad. Las recomendaciones que hace respecto al personal son, por lo general en forma verbal, pero éstas se tienen muy en cuenta cuando se va a hacer el programa de vacaciones, a dar ascensos, etc.

Concluimos, a base de lo anterior, que Carlos M. Rodríguez Carrero es un supervisor y, como tal, debe estar excluido de toda unidad apropiada de negociación colectiva

9. El status de Amadis Ayala Padró

Amadis Ayala Padró ocupa el puesto de Contador II en la Sección Fiscal del Departamento de Contraloría de la Autoridad. La mayor parte del trabajo que realiza consiste en revisar las actividades de los empleados de la unidad de pago los cuales son, en su mayoría, Auxiliares Fiscales. Tiene que cotejar los comprobantes de los pagos que hace la Autoridad luego de que los empleados de la unidad han procesado toda la papelería que se requiere. Además, coteja las entradas que se hacen en los libros de contabilidad y brega con los acreedores y suplidores de la Agencia en cuanto a pagos se refiere.

Para realizar el trabajo de la unidad Ayala Padró tiene seis empleados a los cuales les asigna tareas, los dirige y supervisa. Es el responsable de la disciplina de este grupo de empleados y, de ser necesario participa en la evaluación.

Concluimos, por lo anterior, que Amadis Ayala Padró es un supervisor y, por lo tanto, debe estar excluido de toda unidad apropiada de negociación colectiva.

10. El status de Juan Ramón López Rivera

Juan Ramón López Rivera ocupa el puesto de Asistente de Supervisor I en la División de Servicios a Consumidores de la Autoridad. Su labor consiste en ayudar al Jefe de la División en la implantación de las normas y técnicas de trabajo de la División. En este orden, tiene que realizar estudios que tienden a mejorar las formas o técnicas de trabajo de modo que éste se realicen con mayor eficiencia y rapidez. Hacia estos fines visita otras agencias gubernamentales y privadas y estudia y analiza las técnicas que se usan en ellas para determinar cuales son de aplicación y utilidad en la Autoridad. También hace estudios sobre tiempo y volumen de trabajo de los empleados ya por petición de éstos o por iniciativa de la propia División. También diseña nuevos formularios o trata de simplificar los existentes de modo que las tareas de los empleados resulten más sencillas.

En adición a lo anterior, el Sr. López Rivera también trabaja como oficial de enlace entre la División de Servicios a Consumidores y la División de Sistemas y Procedimientos de la Autoridad. Esto ocurre especialmente cuando ambas Divisiones participan en la redacción e implementación de un procedimiento.

En el desempeño de sus funciones Juan Ramón López Rivera cuenta con la ayuda del empleado Mario A. González Mattés. Fue López Rivera quien entrevistó y seleccionó a este empleado cuando vino a la Agencia y luego le evaluó el trabajo para la aprobación del período probatorio. En adición, le asigna las tareas a este empleado, le firma la tarjeta de asistencia si fuese menester, así como las solicitudes de vacaciones.

Concluimos, a base de lo anterior, que Juan Ramón López Rivera es un supervisor. Por tal razón le recomendamos a la Junta que lo mantenga fuera de toda unidad apropiada de negociación colectiva.

11. El status de Jaime Tous Rodríguez

Esta persona ocupa el puesto de Ingeniero II en la unidad de Estudios Pitométricos en el área de Operaciones de la Autoridad. Sus funciones consisten en hacer estudios del flujo de agua potable en toda la isla. También hace estudios de las presiones de agua y ayuda en la localización de defectos en el funcionamiento del sistema de acueducto cuando el personal asignado a los distritos se le hace difícil localizarlo. También hace estudios sobre desperdicio de agua, realiza pruebas para determinar eficiencia de las estaciones de bombeo y hace las recomendaciones que considere pertinentes para mejorar el sistema.

En el desempeño de sus funciones el Ingeniero Tous Rodríguez tiene tres ayudantes asignados a su dirección y supervisión. A estos le supervisa el trabajo y vela porque actúen conforme a las normas establecidas por la Autoridad.

Para ocupar el puesto la Autoridad exige que el candidato sea graduado de Ingeniería de una Universidad o colegio reconocido. El Ingeniero Tous Rodríguez satisface tal requisito.

Por todo lo anterior, concluimos que el Ingeniero Jaime Tous Rodríguez es un supervisor y, como tal, debe estar excluido de toda unidad apropiada de negociación colectiva.

APARTADO B

Personas cuyo status en la Autoridad es de empleado

La investigación revela que de las 47 personas que sometieron las partes para que se investigasen y se hiciese una determinación de su status, 34 corresponden a empleados profesionales. Para mayor conveniencia, hemos agrupado a estas personas por clasificación de empleo o similitud de tareas.

1. El status de Jesús López Rivera, Luis A. García Ramírez, José del C. Martínez Delgado, Alberto Vergeli Maldonado y Carlos E. Santiago Vigil

El status de estas personas en la Autoridad fue determinado por la Junta en su Decisión Núm. 510 del 18 de diciembre de 1969. En ella se determinó que todos son empleados profesionales y que, como tales, tienen el derecho de organizarse para negociar colectivamente. En esa ocasión se señaló que las funciones de éstos consisten en verificar, cotejar y analizar los gastos de operaciones y mantenimiento, servicio a los consumidores y proyectos para asegurarse de que estén dentro de lo presupuestado; preparar datos estadísticos para confeccionar el presupuesto anual y para que el Administrador de Distrito pueda mantener un control adecuado de las operaciones, verificar que las oficinas de distrito cumplan con las normas y procedimientos establecidos por la Autoridad; ayudar al Administrador de Distrito en la formulación de reglas y métodos internos a adoptarse para la mejor coordinación y eficiencia de las labores administrativas del Distrito, cotejar y endosar las nóminas de tiempo ordinario y extraordinario de los sueldos de los empleados regulares y a jornal; custodiar la propiedad del distrito; hacer inventarios periódicos de la propiedad mueble; y llevar un control de gastos de transportación, gasolina, millaje, luz eléctrica, etc.

Luego de que la Junta hiciera tal determinación, estos funcionarios han continuado realizando básicamente las mismas tareas excepto que en algunos casos le han añadido algunas responsabilidades adicionales. Estas dependen, sin embargo, de la actitud que hacia ellos asuma el Administrador de Distrito quien es verdaderamente el que toma las decisiones y es el verdadero supervisor del personal de su oficina. Unos Administradores alegan más responsabilidades que otros en estas personas por lo que, a pesar de que teóricamente deben hacer lo mismo, algunos tienen más deberes que otros.

Como se señaló en la Decisión de la Junta, estas personas no tienen personal estrictamente bajo su dirección y supervisión y carecen de los poderes básicos de emplear, despedir, ascender o disciplinar a otros empleados. En las cuestiones administrativas se relacionan con el personal y puede que asignen algún trabajo a este y lo revisen, pero este personal de la oficina del Administrador tiene su supervisor inmediato quien es el Administrador del Distrito. Además, en las distintas oficinas cada Ingeniero

tiene asignada una secretaria y ésta prácticamente le responde a esa persona. Estos ingenieros, en la mayor parte de las ocasiones, son los que le asignan el trabajo, lo revisa y en muchas ocasiones son los que les recomiendan vacaciones, aumentos de sueldos, etc.

Concluimos, por lo anterior, que estas cinco personas son empleados profesionales. Por lo tanto, recomendamos a la Junta que los mantenga incluidos en la unidad apropiada de éstos.

2. El status de Alejandrina Andino Santos

Esta persona ocupa el puesto de Ejecutivo I en la Sección Administrativa del Area de Operaciones de la Autoridad. Su labor consiste en recopilar información sobre la existencia y consumo de los productos químicos que la Autoridad utiliza en la purificación del agua. En este orden, tiene que preparar informes estadísticos mensuales y brindar información a las distintas dependencias de la Autoridad y a otras agencias gubernamentales y a entidades privadas.

En adición a lo anterior, la Señora Andino Santos también recopila información sobre la producción de agua para conocimiento de la Autoridad y del público en general, obtiene las lecturas diarias de distintos lagos suplidores de agua y las marca en una tabla que a esos efectos se prepara; contesta correspondencia relacionada con este mismo asunto, y ayuda al Jefe en los inventarios que se hacen para preparar el presupuesto.

La Señora Alejandrina Andino no tiene personal asignado. Además carece de autoridad para emplear, despedir, ascender, disciplinar o tomar decisiones que ya favorable o adversamente afecten el status de los empleados de la Autoridad.

Para ocupar la posición de Funcionario Ejecutivo I la Autoridad requiere que la persona sea graduada de colegio o universidad reconocida. La Señora Alejandrina Andino es graduada de Bachillerato en Artes de la Universidad de Puerto Rico

Por lo anterior, concluimos que la señora Alejandrina Andino es una empleada profesional y, por lo tanto, debe estar comprendida en la unidad apropiada de éstos.

3. El status de Carmen Martínez de del Toro

La señora Carmen Martínez de del Toro ocupa el puesto de Funcionaria Ejecutiva I en la División de Compras del Departamento de Suministro de la Autoridad. Trabaja en la Unidad de Control y Estadísticas la que, en adición de ella, se compone del siguiente personal:

- 2 empleadas a cargo del archivo
- 2 empleadas a cargo de la fase de estadísticas
- 1 empleada a cargo del sistema de control de casos

En buena medida la señora Martínez de del Toro se encarga de que el trabajo de la unidad se realice. Conjuntamente con el Jefe de la Sección, Señor Carlos Rosario Esquilín, y con el personal de la unidad, planifica y coordina la preparación de los diferentes informes que deben hacerse. Tiene la responsabilidad de velar porque se hagan a tiempo ciertos informes rutinarios tales como los siguientes: transportación, teléfono, gasolina, distribución de trabajo, etc. Tiene bajo su control, además, la asistencia de los empleados de la División, así como un peti-cash de \$300,00 para los gastos misceláneos.

Aunque la señora Martínez de del Toro aparece al frente de la unidad para la cual trabaja, el personal de ésta no está bajo su dirección y supervisión inmediata. Quien realmente está a cargo del personal y toma o recomienda, si alguna, las determinaciones que sean necesarias relativas al mismo, es el señor Carlos Rosario Esquilín, Jefe de la Sección de Servicios Administrativos y quien ocupa el puesto oficial de Funcionario Ejecutivo III. Es éste quien conjuntamente con el Jefe de la División, toma las determinaciones sobre vacaciones a los empleados, hace las evaluaciones, entrevista al personal nuevo para la unidad, toma acciones disciplinarias si fuere necesario, etc. Puede que al hacer estas determinaciones le pregunten sobre algún aspecto a la señora Martínez de del Toro, pero tal acción no la convierte de hecho en supervisora o ejecutivo. Tal rango conlleva, a nuestro juicio, elementos más concisos y reales que esto. Es significativo el hecho de que en la Autoridad, de los jefes de secciones en adelante no les exigen que "ponchen" tarjeta de entrada y salida. La señora Martínez de del Toro, como los demás empleados de la División, tiene que "ponchar" tarjeta a la hora de entrar y salir al trabajo.

Para ocupar este puesto de Funcionario Ejecutivo I la Autoridad exige bachillerato en cualquier disciplina de universidad o colegio reconocido. La señora Martínez de del Toro sólo tiene dos años de colegio pero le sustituyen lo que le falta en preparación académica por la experiencia que tiene en la propia Autoridad.

Por lo anterior, concluimos que la señora Carmen Martínez de del Toro es una empleada profesional y, como tal, debe estar comprendida en la unidad apropiada de éstos.

4. El status de Rubén I. Olivencia Torres

Esta persona ocupa el puesto de Asistente de Supervisión I en la División de Servicios a Consumidores del Area de Operaciones de la Autoridad. Sus funciones consisten en visitar las agencias comerciales para ver que estén siguiendo las normas y procedimientos establecidos por la Autoridad. Luego de hacer las anotaciones correspondientes durante sus visitas, hace un informe en el que señala los errores que encuentra a fin de que se tomen las medidas necesarias para corregirlos. En algunas ocasiones hace recomendaciones para corregir las fallas que señala. En la realización de su trabajo, el señor Olivencia Torres no tiene empleados bajo su supervisión y dirección. Tampoco tiene poderes para nombrar, despedir, ascender, disciplinar o variar, de alguna manera, el status de los empleados de la Autoridad.

Para ocupar esta plaza el patrono exige un bachillerato de colegio o universidad reconocida. El señor Olivencia Torres no tiene esta preparación académica pero la Autoridad le sustituyó la experiencia que tiene en el trabajo por la preparación académica.

En su tarea esta persona ejerce gran discreción, pues como hemos señalado, tiene que hacer observaciones y recomendaciones sobre si los empleados siguen, en sus respectivos trabajos, los procedimientos que establece la Autoridad. Sin embargo, a nuestro juicio, no forma parte de la gerencia pues carece del elemento fundamental que es el poder para formular e implantar la política y las normas de la empresa ^{1/}

^{1/} Vease el caso de Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, Núm. P-2369, D-465

Por lo anterior, concluimos que el señor Rubén I. Olivencia Torres es un empleado profesional y, como tal, debe estar incluido en la unidad apropiada de éstos.

5. El status de Nelly E. Cintrón Pérez, Aida L. Torres de Aponte, Aida M. Sanchez Ramos, Rosario D. Rodríguez Martínez, Carmen Ana Rivera Negrón, Luz Elia Villalobos Casanova, Luis F. Morales Cordero y Cayetano Rivera Caraballo

Estas ocho personas ocupan el puesto de Técnico de Administración II en la Sección de Organización y Método del Departamento de Sistemas y Procedimientos de la Autoridad con la excepción de Cayetano Rivera Caraballo que es III. Se dedica a realizar estudios sobre los sistemas, métodos y procedimientos que se utilizan en la agencia. Tienen que hacer estudios, entre otros, sobre distribución de espacio, equipo necesario, diseñar y revisar los formularios a utilizarse, preparar organigramas de la agencia, sus departamentos y divisiones, estudiar y diseñar proyectos de itinerarios de trabajo, sistemas de nóminas y de personal, etc. Algunos de ellos están adscritos, en estos momentos, a firmas de consultores privados que realizan estudios sobre cómo mejorar los procedimientos administrativos de la Autoridad.

En el desempeño de sus funciones estos funcionarios visitan otras agencias públicas y privadas para obtener información sobre los procedimientos administrativos que éstas usan y ver cómo esos procedimientos se pueden ajustar a los de la Autoridad. Esto les ayuda a mantener al día los manuales de procedimientos de la Autoridad o para hacer recomendaciones sobre ello. En ocasiones tienen que hacer traducciones con el mismo propósito. También toman y ofrecen adiestramiento sobre los procedimientos administrativos a implantarse.

Para ocupar este puesto la Autoridad requiere un bachillerato de una universidad o colegio reconocido. La investigación revela que todos satisfacen tal requisito, pues son graduados de bachillerato en las universidades del país. Al realizar sus tareas ejercen gran discreción pues tienen que hacer recomendaciones a la Autoridad en cuanto a procedimientos administrativos. Sin embargo, consideramos que no son parte de la gerencia, pues carecen del elemento fundamental que es el poder para formular, decidir e implantar la política y las normas de la empresa. 2/ Además, ya la Junta había hecho una determinación respecto a esta clasificación al resolver la situación de los votantes cuyos votos fueron recusados en el caso de Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, Num. P-2551, D-510.

La investigación revela también que ninguna de estas personas tienen empleados bajo su dirección y supervisión y, además, carecen de poderes para nombrar, despedir, ascender, disciplinar o variar, ya favorable o adversamente, el status de los empleados de la empresa. Consideramos, por lo tanto, que no son supervisores.

Por lo anterior, concluimos que los señores Nelly E. Cintrón Pérez, Aida L. Torres de Aponte, Aida M. Sánchez Ramos, Rosario D. Rodríguez Martínez, Carmen Ana Rivera Negrón, Luz Elia Villalobos Casanova, Luis F. Morales Cordero y Cayetano Rivera Caraballo son empleados profesionales y, como tales, deben estar comprendidos en la unidad apropiada de éstos.

2/ Vease el caso de la Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, Núm. P-2369, D-465

6. El status de Fernando Luis Espada Correa, Miguel Angel Vázquez Rivera y Ramon A. Hernandez Feliciano

Estas tres personas ocupan el puesto de Técnico de Administración III en la Sección de Reclutamiento del Departamento de Personal de la Autoridad. El trabajo que realizan consiste en entrevistar a las personas que solicitan empleo en la Autoridad. Mediante unas normas ya establecidas determinan para qué puestos cualifican las personas que son entrevistadas. También administran exámenes a los candidatos sean éstos de afuera o de la propia agencia. Bregan con los registros de ascenso que se establecen en los convenios colectivos incluidos los de los empleados profesionales. También preparan normas de reclutamiento las cuales someten a la consideración del jefe para que éste las acepte, las rechace o las enmiende. Asimismo, ayudan en la preparación de las curvas (passing grades) de los exámenes que se ofrecen y las someten al supervisor para la acción que éste considere apropiada. No participan, sin embargo, en la preparación de los exámenes pero sí ayudan a administrarlos. Establecen relaciones con el Departamento del Trabajo, instituciones escolares y otras agencias para el reclutamiento de personal cualificado para la agencia.

Ninguna de estas tres personas tiene empleados asignados a su dirección y supervisión y carecen de poderes para emplear, despedir, ascender, disciplinar o variar de una u otra forma el status de los empleados de la Autoridad.

Para ocupar este puesto la Autoridad requiere un bachillerato o colegio reconocido. Estas tres personas, revela la investigación, cumplen con este requisito.

A pesar de que los tres bregan con el reclutamiento de personal para la empresa, no son ellos los que toman las decisiones en cuanto a las normas que han de imperar en el procedimiento de reclutamiento o selección de personal.

Concluimos, pues, que los tres son empleados profesionales y, como tales, deben estar comprendidos en la unidad apropiada de éstos.

7. El status de Luis R. Piña Nazario

Esta persona ocupa el puesto de Ingeniero IV en la División de Producción del Area de Operaciones de la Autoridad. El trabajo que realiza consiste en hacer investigaciones de los desperdicios industriales que las industrias descargan en los alcantarillados sanitarios. A través de estas investigaciones se determina si estas descargas afectan las líneas de alcantarillados y si las mismas están dentro de los límites establecidos por la Autoridad. Tiene que determinar el factor de sobrecarga de las industrias que están sobre los límites establecidos. Es a través de este factor que se determina lo que debe pagar cada industria por descargar sus desperdicios en los alcantarillados. El señor Piña Nazario tiene a su cargo, además, la vigilancia de la cuenca del Río Loíza para mantener un control de la calidad de las aguas. También tiene la responsabilidad de asesorar a los dirigentes de las industrias para mejorar la calidad de los afluentes de éstas.

El señor Piña Nazario tiene también la responsabilidad de instruir a los empleados que se encargan de tomar y analizar muestras de desperdicios industriales así como a los que investigan acometidas pluviales clandestinas.

Luego de hacer las determinaciones tiene que asesorar a los industriales sobre las formas a utilizarse para corregir las fallas. Por último, tiene la responsabilidad de hacer informes de las tareas que realiza y de efectuar las tareas adicionales especiales que le asignan los supervisores.

En el desempeño de sus funciones el Ingeniero Piña Nazario tiene que dar instrucciones especialmente a dos auxiliares. Consideramos, sin embargo, que no es el supervisor inmediato de éstos pues es el Ingeniero José R. Goitía quien toma las decisiones que puedan afectar, en primera instancia, el status de estos empleados así como el del propio Piña Nazario. Las tareas que se realizan en la División ya prácticamente están determinadas de antemano y cuando es necesario dar instrucciones que se salgan de la rutina, el Ingeniero Goitía es quien toma acción. En algunas ocasiones, especialmente cuando el Jefe de la División no está presente, el Ingeniero Piña Nazario da alguna instrucción o toma alguna determinación de trabajo pero esto no lo convierte en un supervisor.

Por lo anterior, concluimos que el Ingeniero Luis R. Piña Nazario es un empleado profesional y, como tal, debe estar comprendido en la unidad apropiada de éstos.

8. El status de Carlos L. Almodóvar Almodóvar

Esta persona ocupa el puesto de Ingeniero Químico III en la División de Producción del Area de Operaciones de la Autoridad. Al celebrarse la elección el 14 de febrero de 1969 trabajaba en el Distrito de Humacao y estaba a cargo de la supervisión del personal que trabajaba en las plantas de filtración, acueductos y plantas de alcantarillados. Era el responsable en ese Distrito de mantener la calidad del agua según las normas vigentes. Posteriormente fue trasladado a Matagüez y actualmente está en ese Distrito, en calidad de asistente del Ingeniero Químico. Conjuntamente con éste realiza la labor necesaria para mantener las plantas en buen estado de funcionamiento.

El Ingeniero Químico del Distrito, Ingeniero Luis Vélez Lugo, es la persona que se encarga de tomar las acciones que de alguna manera puedan alterar el status de los empleados de las plantas. En caso de ausencia de éste, el Ingeniero Carlos L. Almodóvar le sustituye y realiza tales funciones. Esto, sin embargo, no ocurre con frecuencia. Por tal razón consideramos que el Ingeniero Carlos L. Almodóvar es un empleado pues las sustituciones a supervisores por períodos breves, no le dan status de supervisor o de ejecutivo.

Por lo anterior, concluimos que el Ingeniero Carlos L. Almodóvar Almodóvar debe estar comprendido en la unidad apropiada de empleados profesionales.

9. El status de Esteban Pacheco Sánchez

Esta persona ocupa el puesto de Ingeniero III en la Sección de Inspección del Departamento de Servicios Técnicos de la Autoridad. Actualmente está asignado al Distrito de Ponce. Sus funciones consisten en inspeccionar los sistemas sanitarios y de acueductos del Distrito tanto en urbanizaciones privadas como públicas, edificios en condominio, apartamentos, gasolineras, escuelas, etc. El propósito de las inspecciones es asegurarse que las instalaciones se hagan de acuerdo con las normas de la Autoridad. Estos proyectos son construídos generalmente por contratistas ajenos a la Autoridad. El Ingeniero Pacheco se encarga

también de orientar a los constructores, a los dueños de proyectos, a los proyectistas, etc., sobre la forma en que deben someter los planos, dónde deben someterlos, cómo deben hacer las instalaciones para evitar problemas futuros, etc. En adición, tiene que cotejar el que se haya pagado por el servicio de agua mientras se construye a fin de otorgar el endoso correspondiente.

En el desempeño de su función el Ingeniero Pacheco cuenta con un auxiliar, en este caso el señor Sigfredo Rivera García. Este también realiza inspecciones de los proyectos, de modo que hace más o menos la misma labor que el Ingeniero Pacheco. Este último, sin embargo, es el responsable de estas actividades de inspección en el Distrito de Ponce.

En algunas ocasiones el Ingeniero Pacheco revisa el trabajo que hace el Auxiliar pero ya las tareas de ambos están prácticamente determinadas. En términos de supervisión propiamente dicho, el Ingeniero Pacheco tiene poca ingerencia sobre los asuntos del Auxiliar. Si alguna determinación hay que hacer con relación a éste relacionada con vacaciones, ascensos acción disciplinarias, traslados o cambio en su status, la misma la toman a nivel de la oficina central el Jefe de la Unidad de la Sección o del Departamento. No tiene el Ingeniero Pacheco Sánchez autoridad para emplear, despedir, ascender, disciplinar o variar de alguna manera el status de empleados de la Autoridad.

En vista de lo anterior, concluimos que el Ingeniero Esteban Pacheco Sánchez en un empleado profesional y, como tal, debe estar comprendido en la unidad de éstos.

10. El status de Jaime Rodríguez Marcano

Esta persona ocupa el puesto de Ayudante de Ingeniería en el Departamento de Construcción de la Autoridad. Su nombramiento es temporero. Sus funciones actuales consisten en hacer informes quincenales, mensuales, etc., sobre la situación de los proyectos en construcción, sobre estimados de costos y, además, realiza trabajos misceláneos especialmente sobre la búsqueda de información sobre los proyectos que el jefe necesita.

Para este puesto la Autoridad le requiere tener dos años de colegio o universidad reconocida, requisito éste que satisface el señor Rodríguez Marcano.

En el desempeño de sus funciones el señor Rodríguez Marcano no tiene personal asignado a su dirección y supervisión. Además, carece de poderes para emplear, despedir, ascender, disciplinar o afectar, de alguna manera, el status de otros empleados de la Autoridad.

Por lo anterior, concluimos que Jaime Rodríguez Marcano es un empleado profesional que, de continuar trabajando para la Autoridad, podría estar comprendido en la unidad de empleados profesionales de ésta.

11. El status de Bolívar A. Amaro García

Esta persona ocupa el puesto de Agrimensor en el Departamento de Servicios Técnicos de Ingeniería de la Autoridad. Según la información que ésta brinda, quedó cesante el 27 de julio de 1971. Como Agrimensor su labor consistía en hacer topografías, relocalizar puntos para las líneas de alcantarillados y de acueductos y plotear estas líneas.

Para el puesto la Autoridad exige que el candidato seleccionado sea agrimensor. El señor Amaro García satisfacía este requisito aunque no tenía la licencia. Sin embargo, a la fecha de la investificación le faltaba ya muy poco para obtener el grado de Bachillerato en Ingeniería Civil.

En el desempeño de sus funciones el señor Amaro García no tenía personal alguno asignado a su dirección y supervisión. Tampoco tenía poderes para emplear, despedir, ascender, disciplinar o afectar, favorable o adversamente, el status de los empleados de la Autoridad.

Concluimos, por lo anterior, que Bolívar A. Amaro García era un empleado profesional que, de continuar en la Autoridad en esas mismas funciones, podría tener derecho a estar comprendido en la unidad de empleados profesionales.

12. El status de Jesús Castillo Sánchez, Francisco Rodríguez Santiago y Vicente de Armas Delgado

Estas tres personas ocupan el puesto de Funcionario Ejecutivo II, el primero en el Area de Planificación y los otros dos en el Departamento de Diseño de la Autoridad. Francisco Rodríguez está en la División de Acueductos Rurales mientras que Vicente de Armas Delgado está en la de Acueductos Urbanos, ambas del Departamento de Diseño.

Jesús Castillo se encarga de llevar el control de la propiedad del Area de Planificación, distribuir los sueldos de los empleados para cargarlos presupuestariamente a las distintas cuentas; preparar el informe de Actividades Sobresalientes para la firma del Director del Area, preparar el Informe Anual y cualesquiera otros que le solicite el Director del Area de Planificación. El señor Jesús Castillo es también el encargado de preparar las nóminas quincenales de los empleados a jornal así como la de tiempo extra de los regulares; es quien organiza el archivo, prepara cartas, memorandos, etc. para la firma del jefe, trabaja en el presupuesto anual de Area de Planificación y lleva el control de las cuentas de la Oficina de Estudios de Recursos de Agua.

Francisco Rodríguez y Vicente de Armas realizan en sus respectivas Divisiones, una labor similar. Ambos se encargan de bregar con los asuntos administrativos en sus Divisiones. Son los encargados de la propiedad, preparan las nóminas de los empleados a sueldo fijo y por jornal, trabajan en los presupuestos, preparan los informes que los jefes les requieren, bregan con la compra de equipo, etc.

Para ocupar el puesto de Funcionario Ejecutivo II, la Autoridad requiere tener un bachillerato de colegio o universidad reconocida. Tanto Jesús Castillo como Francisco Rodríguez y Vicente de Armas satisfacen este requisito.

En el desempeño de sus respectivas funciones estas personas no tienen empleados asignados a su dirección y supervisión. Carecen, además, de poderes para emplear, despedir, ascender, disciplinar o hacer determinaciones que afecten, favorable o adversamente, el status de los empleados de la Autoridad.

Por lo anterior, concluimos que tanto Jesús Castillo como Francisco Rodríguez y Vicente de Armas son empleados profesionales y, como tales, deben estar comprendidos en la unidad apropiada de éstos.

13. El status de Ramón Bauzá Bauzá y de Judith Delbrey de Pérez (Esta última ocupa la posición que ocupaba Angel M. Ríos Soto quien fue ascendido).

Estas dos personas ocupan el puesto de Contador II, el primero en la División de Contabilidad General y la segunda en la Sección de Activo Fijo en la División de Capital Fijo e Informes Financieros. Bauzá Bauzá trabajaba en la preparación de la distribución de la nómina de todos los empleados de la Autoridad. Recibe mensualmente una relación de gastos de cada actividad que se realiza en la Autoridad incluyendo el sueldo de los empleados. Al recibir esta relación de gastos la coteja con la nómina regular de sueldos con el propósito de verificar que éstos estén correctos y no se haya omitido a alguna persona. Se corrigen los errores que haya y luego se envía la nómina a las máquinas electrónicas. Es también el responsable de verificar que la nómina de empleados a jornal esté correctamente cuadrada.

También recibe las órdenes que las distintas divisiones hacen a los talleres con el fin de cotejar que estén correctas y, además, para contabilizar los gastos.

Después que las nóminas regresan de las máquinas electrónicas, se preparan los "journal vouchers" para contabilizar los gastos y, además, llevar las transacciones a los libros. Es también responsabilidad suya reconciliar las nóminas con los informes que recibe de las distintas dependencias de la Autoridad.

En esta labor trabajan también otras personas y, aun cuando Bauzá Bauzá les revisa en algunas ocasiones el trabajo que realizan, no es su jefe inmediato pues carece de poder alguno sobre ellos. Además el trabajo es completamente rutinario de modo que cada cual hace lo mismo diariamente.

Judith Delbrey trabaja con los contratos de costos de los proyectos federales y estatales. Se encarga de enviar las certificaciones de los contratistas al gobierno para que éste adquiere conocimiento de los gastos y reembolse el dinero a la Autoridad. También se encarga de enviar las notificaciones de los costos de los proyectos, tanto federales como estatales, mientras los mismos estén en marcha con el fin de evitar sobregiros. Prepara los informes mensuales de costos y revisa las certificaciones y nóminas que se pagan a los contratistas para enviarse al gobierno. Tiene también la responsabilidad de buscar la información que solicitan las agencias federales y estatales, busca los documentos necesarios para las intervenciones de los auditores y explicar a éstos lo concerniente a los costos de los proyectos de modo tal que dichos auditores queden satisfechos y acepten los informes que se les someten.

En adición, la señora Delbrey ayuda a la preparación de los informes de la Sección de Activo Fijo para la cual trabaja.

En el desempeño de su labor la señora Delbrey no tiene personal asignado a su dirección y supervisión. Así como el señor Ramón Bauzá, ésta carece también de poderes para afectar, de alguna manera, el status de empleados en la Autoridad.

Como ya señalamos, la señora Delbrey brega con información y documentos relacionados con los proyectos que realiza la Autoridad con fondos estatales y federales.

No brega la señora Delbrey, sin embargo, con asuntos confidenciales relativos a las relaciones obrero-patronales ni está en una relación confidencial con las personas que en la Autoridad formulan o establecen las normas directrices de la política obrero-patronal. No es, por tanto, la señora Delbrey una empleada confidencial.

Para ocupar los puestos de estas dos señoras, la Autoridad requiere que los candidatos tengan preparación de colegio o universidad reconocida o su equivalente en experiencia. Ambos satisfacen este requisito según revela la investigación.

Por todo lo antes expuesto concluimos que estas dos personas son empleados profesionales y, como tales, deben estar comprendidas en la unidad apropiada de éstos.

14. El status de Mario A. González Maltés

Esta persona ocupa el puesto de Gerente Auxiliar II en la Sección de Métodos de la División de Servicios a Consumidores. Su trabajo consiste en analizar los métodos y las técnicas de trabajo que se utilizan en las oficinas comerciales de la Autoridad para mejorarlas y hacerlas uniformes. Ayuda en la redacción de los manuales de instrucción y en el establecimiento de los procedimientos que debe utilizar el personal de estas Oficinas.

En esta función el señor González Maltés visita las oficinas comerciales para realizar estudios estadísticos sobre el volumen de trabajo de algunas plazas. Luego de hacer estos estudios tiene que rendir informes verbales o escritos sobre los hallazgos que encuentra. También se comunica por teléfono, por carta o personalmente con otras agencias públicas o privadas para conocer los sistemas que éstas usan o para coordinar actividades. En adición, tiene que preparar los informes que se le requieren.

En el desempeño de sus funciones, el señor González Maltés no tiene personal alguno asignado a su dirección y supervisión. Además, carece de poderes para emplear, despedir, ascender, disciplinar o para afectar favorable o adversamente el status de los empleados de la Autoridad. El señor González Maltés tampoco está en una relación confidencial con los que formulan o establecen la política obrero-patronal de la empresa. Consideramos, además, que tampoco es un empleado cuyas funciones estén íntimamente ligadas a la gerencia pues en modo alguno creemos que las mismas puedan causar entorpecimientos o situaciones conflictivas a la gerencia frente a las demandas económicas o de otra naturaleza que puedan hacer las organizaciones obreras.

Para ocupar el puesto de Gerente Auxiliar II, la Autoridad requiere estudios universitarios o el equivalente en experiencia. Según la investigación, el señor González Maltés satisface este requisito.

Por todo lo anterior, concluimos que el señor Mario A. González Maltés es un empleado profesional y, como tal, debe estar comprendido en la unidad apropiada de éstos.

15. El status de Carmen Ana Alamo Rivera

Esta persona ocupa el puesto de Trabajadora Social en el Departamento de Personal de la Autoridad. Sus funciones consisten en diagnosticar y ofrecer tratamiento social a los empleados que presentan problemas personales siempre que el trabajo de éstos se afecte de alguna manera. Brega con los problemas de relaciones que surjan entre supervisores y supervisados y ayuda a los empleados que estén en plan de jubilación para facilitar el trámite de los asuntos que surjen en este proceso.

Tiene también la responsabilidad de hacer referimientos de los empleados a las distintas agencias públicas o privadas para ayudar a éstos a resolver problemas. Así también hace referimientos al médico que atiende los casos de los empleados de la Autoridad para hacer evaluaciones respecto a alegaciones de éstos en el sentido de que no pueden ejercer las tareas propias de sus puestos. Además, ofrece orientación a los familiares de los empleados que fallecen en torno a los beneficios a que tienen derecho. Se encarga también de bregar con el Fondo del Seguro del Estado en relación con los asuntos de enfermedades relacionadas con el trabajo que sufren los empleados especialmente si son enfermedades de larga duración.

La señora Alamo Rivera es también la persona responsable de coordinar las campañas educativas que se inicien en la comunidad y que puedan tener repercusión en la Autoridad. Es el caso de, por ejemplo, las campañas contra el alcoholismo, adiestramiento sobre cómo evitar la biliarzia, etc.

En adición, tiene la señora Alamo Rivera que preparar informes de la labor realizada así como informes especiales que le asigne su jefe.

La investigación revela que en el desempeño de sus funciones la señora Alamo Rivera no tiene personal alguno asignado a su dirección y supervisión y carece de poderes para emplear, despedir, ascender, disciplinar o tomar decisiones que afecten favorable o adversamente a los empleados de la Autoridad.

En algunas ocasiones, y como parte de la labor profesional que realiza, la señora Alamo hace recomendaciones sobre las personas que atiende. Estas recomendaciones pueden afectar, indirectamente el status de esas personas. Tales recomendaciones, per se, no la cualifican, sin embargo, como parte integrante de la gerencia. 3/

Para ocupar el puesto de Trabajadora Social la Autoridad requiere que los candidatos sean graduados de colegio o universidad reconocida, si posible con Maestría en Trabajo Social. La incumbente en este caso satisface tal requisito.

Por todo lo anterior, concluimos que la señora Carmen Ana Alamo Rivera es una empleada profesional y, como tal, debe estar comprendida en la unidad apropiada de éstos.

16. El status de Luis Díaz Díaz y Nemesio Milián Dieppa

Estas dos personas ocupan el puesto de Asistente de Supervisión II en la División de Servicios a Consumidores de la Autoridad. Están asignadas a la Oficina de Distrito de San Juan. Sus funciones consisten en revisar los informes que las agencias comerciales y los centros de servicios rinden a la Oficina de Distrito. Luego de revisar estos informes los discuten con el Subadministrador de Distrito para ver las fallas que hay en ellos y tratar de encontrar las maneras de corregirlas. También efectúan revisiones de las distintas actividades que se desarrollan en las agencias comerciales y rinden informes al Subadministrador de distrito. Redaptan correspondencia para la firma de éste en la que generalmente se contestan los planteamientos que hacen los abonados. También efectúan las investigaciones

3/ Véase el caso de Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, Núm. P-2369, D-465

especiales que el subadministrador les asigna. En algunas ocasiones tienen que sustituir a algún gerente local, pero esto ocurre muy pocas veces. Es en estas circunstancias que supervisan y dirigen personal alguno. La investigación revela, sin embargo, que durante el 1970 el señor Luis Díaz Díaz no sustituyó gerente local alguno. Como se indicó en el caso de Autoridad de las Fuentes Fluviales, P-2369, D-465, las sustituciones por breves periodos no deben considerarse como base para otorgar rango de supervisor o de ejecutivo a los empleados.

La investigación revela también que las funciones de estas personas continúan siendo básicamente las mismas que las que desempeñaban cuando se decidió el 18 de diciembre de 1969 el caso Núm. P-2551, D-510 relacionado con los empleados profesionales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. En dicha decisión se concluyó que estas dos personas son empleados profesionales.

Por lo anterior, concluimos que tanto Luis Díaz Díaz como Nemesio Millían Dieppa continúan siendo empleados profesionales y, como tales, deben estar comprendidos en la unidad apropiada de éstos.

17. El status de Oscar Lebrón Seda

El status de esta persona en la Autoridad fue resuelto por la Junta en la Decisión que se emitió el 18 de diciembre de 1969 en el caso P-2551, D- 510. Se determinó entonces que el señor Lebrón Seda es un empleado profesional. La investigación realizada ahora revela que esta persona continúa realizando básicamente las mismas tareas que realizaba cuando se resolvió el aludido caso Núm.P-2551.

Los requisitos de la Autoridad para ocupar el puesto es tener un bachillerato de universidad o colegio reconocido. Ya en la aludida Decisión la Junta consideró que, aunque esta persona no tiene la preparación académica requerida, si tiene vasta experiencia en el trabajo. En base de ello, la Junta lo consideró empleado profesional.

En vista de lo anterior, concluimos que no existe base, en este momento, para variar la determinación que hizo la Junta sobre esta persona en dicho caso P-2551. Por tanto, concluimos que es un empleado profesional y, como tal, está comprendido en la unidad apropiada de éstos.

APARTADO C

Personas cuyo status en la Autoridad es de Empleado Confidencial

La investigación revela que de las personas que la Autoridad y la Brotherhood sometieron a la Junta para que ésta hiciese una investigación de su status, una corresponden a empleados confidenciales. Véamos:

1. El status de Wilfredo Ramos Ortiz

Esta persona ocupaba el puesto de Técnico de Administración III en la Sección de Organización y Método de la Autoridad. Sus funciones en ese puesto consistían en estudiar y analizar los informes que rendían los jefes de las distintas dependencias de la Autoridad sobre asuntos disciplinarios y querellas formuladas por los empleados. Tenía que estudiar y analizar los récord de los empleados comprendidos en las querellas o asuntos bajo investigación y ver como el Reglamento de personal de la Agencia se aplicaba en cada caso. Si del análisis que hacía se desprendía que

la información necesaria estaba incompleta, solicitaba que se ampliase la investigación. Si por el contrario ésta resultaba completa entonces preparaba una recomendación sobre la medida disciplinaria a imponerse, la discutía con su supervisor inmediato y éste, a su vez, la discutía con el Director de la Agencia o con el que correspondiese. Luego de aprobarse la recomendación con las enmiendas, procedía a preparar una carta para la firma del Director Ejecutivo en la que se le notificaba al empleado la sanción que se le imponía por la infracción cometida.

En su anterior puesto participaba también en las vistas administrativas que se le celebraban a los empleados que cometían alguna infracción y preparaban estipulaciones para tratar de resolver los casos en las etapas administrativas. Estas gestiones las realizaba normalmente en interés de la gerencia.

Actualmente el señor Ramos Ortiz está adscrito a la Oficina del Asesor de Relaciones Obreras y ocupa el puesto de Analista de Relaciones Obreras. Su labor consiste en preparar estipulaciones para resolver querrelas y asuntos que plantean las uniones a la Autoridad. Además, colabora con el abogado de la Autoridad en los casos que éste lleva ante el Comité de Quejas y Agravios, ante el árbitro, etc., en representación de la Agencia. Tiene también la responsabilidad de asesorar, a los distintos jefes y supervisores de la Autoridad respecto a asuntos relacionados con los convenios colectivos.

En el desempeño de sus funciones, esta persona ayuda en la formulación e implantación de las normas y política obrero-patronal y tiene acceso a la información y a los asuntos obrero-patronales de la Agencia.

Consideramos, por lo antes expuesto, que tanto en su puesto anterior, como en el que ocupa actualmente esta persona ha estado y está en relación confidencial con funcionarios que tienen la encomienda de discutir, formular e implantar normas, directrices y política obrero-patronales en la Autoridad.

A base de estas consideraciones, concluimos que la posición que ocupaba y la que ahora ocupa el señor Ramos Ortiz cae dentro del concepto de confidencialidad que la Ley y las normas de la Junta consideran.* Por lo tanto debe estar fuera de toda unidad apropiada de negociación colectiva.

APARTADO D

Personas cuyo estatus en la Autoridad presentan conflicto potencial de interés con los de otros miembros comprendidos en las distintas unidades apropiadas de negociación colectiva

El status de Raúl González Caraballo

Esta persona ocupa el puesto de Técnico de Administración II en la Sección de Clasificación y Retribución del Departamento de Personal de la Autoridad. Sus funciones consisten en conducir o realizar estudios relacionados con la eliminación, creación, retribución, clasificación y reclasificación de puestos. Redacta las especificaciones de los puestos de nueva creación y evalúa éstos para

* Véase los casos de Autoridad de Tierras, Núm. P-1764; D-261; Unión de Empleados de la Compañía de Fomento Industrial, Num. PP-81, D-333S y Autoridad de las Fuentes Fluviales, Núm. P-2369, D-465.

determinar su valor con relación a las demás clases dentro del plan de clasificaciones. Para estos fines tiene que hacer entrevistas a los funcionarios de la Autoridad, sean éstos ejecutivos, supervisores o del personal unionado. También tiene la responsabilidad de orientar a éstos con relación a los aspectos de clasificación y retribución de los puestos. Al realizar estas funciones el señor González Caraballo tiene discreción para hacer las determinaciones que considere apropiada y, mientras hace los estudios para poder formularlas debe mantener cierta secretividad a fin de que la información no trascienda antes de tiempo fuera del ámbito de las personas que deben conocerlas.

Además, la información que se obtiene de los estudios que el señor González Caraballo realiza puede ser utilizada por la Autoridad para establecer su política de clasificación y retribución de puestos y aún en la negociación de los convenios colectivos con las uniones que representan a los empleados.

En el desempeño de sus funciones el Sr. González Caraballo no tiene personal asignado a su dirección y supervisión. Además, carece de poderes para afectar, de alguna manera, el status de otros empleados en la Empresa.

Para ocupar el puesto de Técnico de Administración II, la Autoridad requiere un bachillerato de universidad o colegio reconocido. La investigación revela que le señor González Caraballo satisface este requisito.

Como hemos visto, esta persona realiza ciertas funciones en las cuales tiene que intervenir directamente o indirectamente con los empleados comprendidos en las distintas unidades de negociación colectiva; o provee y tiene acceso a la información necesaria para la Autoridad establecer sus normas y política general en su campo tan susceptible como es el de la retribución a los empleados. La tarea de esta persona es muy similar a la de los que en la Autoridad de las Fuentes Fluviales ocupa el puesto de Analista de Ocupaciones en el Departamento de Clasificación y Paga de la División de Personal. A estos la Junta los excluyó de la unidad de los empleados profesionales por tener conflicto de intereses con esos empleados y con los que están comprendidos en otras unidades de negociación colectiva de la propia Autoridad de las Fuentes Fluviales.*

Por lo anterior, concluimos que el Sr. Raúl González Caraballo es un empleado profesional pero que, debido a la naturaleza de sus funciones, no debe estar representado por organización obrera que represente a otros empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Notifíquese a las partes.

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 1972.

JOSE OSCAR ORTIZ
Jefe Examinador

* Véase el caso de Autoridad de las Fuentes Fluviales, Núm. P-2369, D-465